

Guatemala, 1990; el proceso electoral

Carlos Cáceres

Antecedentes

Guatemala, 1984: Una frase circulaba entre los guatemaltecos: ¡Los militares regresan a sus cuarteles! Manifestaciones de apatía, incredulidad o satisfacción inundaban el ambiente político. Nuevos y tradicionales partidos y personalidades políticas aparecieron buscando alianzas electorales que se afirmaban en horas y concluían semanas después. Opiniones divergentes, dudas e inquietudes despertaban las promesas del ejército de respetar el resultado de las elecciones.

La convocatoria a elecciones, entre otros factores, fue una forma de evitar el rechazo internacional por el amordazamiento a los medios de comunicación y por la falta de garantías individuales. Era una acción que trataba de evitar el desprestigio gubernamental por la agresión a los derechos humanos.

Desde el Palacio Nacional, el general Óscar Humberto Mejía Vítores —quien encabezó un golpe de Estado en 1983— declaraba su oposición al diálogo con el movimiento democrático y revolucionario. Rumores de un nuevo cuartelazo se unían a balaceras en los alrededores del Palacio Nacional y cuarteles. Nunca se aclararon. El gobierno afirmaba: "No es cierto que se esté preparando un golpe de Estado".

La desconfianza de los guatemaltecos para afiliarse a algún partido político era la implicación de anteriores procesos electorales que estuvieron marcados por fraudes e imposición. Mediante la realización de elecciones, los militares perseguían convencer públicamente de que desaparecería el autoritarismo en la conducción estatal. El ejército consideró que, recuperando el marco institucional como fuerza hegemónica, podría convertirse en el eje que aglutinara políticamente a los guatemaltecos sin alterar su autonomía como garante del Estado.

El 1° de julio de 1984 —el ejército lo denominó *Día de fiesta nacional*— se efectuaron las elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El total de personas empadronadas fue de 2 millones 754 mil 430. El partido que más votos obtuvo fue la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). El 1° de agosto quedó instalada en forma oficial la ANC y se inició el proceso para discutir y aprobar una nueva constitución.

La espiral represiva no se detuvo. El movimiento sindical y popular continuaba desarticulado, y miles de campesinos indígenas buscaban refugio en las fronteras por la represión. Los diputados entregaron la Constitución de la República: el proceso electoral guatemalteco, en su primera fase, había concluido. En toda esta etapa continuó el conflicto armado interno, según fue reconocido por la ONU, el 5 de septiembre de 1983.

El 3 de noviembre de 1985 se realizaron las elecciones para presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República y alcaldes en todo el país. Fueron siete candidatos presidenciales para unas elecciones que seguían considerándose inseguras. Sin embargo, la calma en que transcurrieron las votaciones anuló el temor de que se cometerían actos de violencia. En 5 mil 142 urnas que se colocaron en todo el país, los guatemaltecos pudieron desarrollar su derecho político —tantas veces vulnerado— para elegir a sus gobernantes.¹

La DCG ganó las elecciones. Obtuvo 641 mil 193 votos. En su Proyecto Nacional —un plan reformista con alcances limitados— recogieron la experiencia de décadas de participación política legal. Sus candidatos fueron Marco Vinicio Cerezo Arévalo, con amplia trayectoria demócratacristiana, antiguo dirigente universitario y maestro de la Universidad de San Carlos —nacional y autónoma—; y Roberto Carpio Nicolle, egresado de Ciencias Políticas, de la Universidad privada "Rafael Landívar".

La segunda fuerza política fue el partido Unión del Centro Nacional (UCN). Logró 336 mil 952 votos. Sus candidatos fueron Jorge Carpio Nicolle, un empresario de la prensa, fundador y director de uno de los principales diarios del país, *El Gráfico*; y el candidato a vicepresidente fue Ramiro de León Carpio, graduado en la Universidad "Rafael Landívar". A la UCN la apoyaron sectores que se salían del esquema tradicional de la derecha guatemalteca.

Ni la DCG ni la UCN alcanzaron el número de votos requeridos por la ley para ganar las elecciones. Las dos organizaciones participaron en una segunda vuelta electoral, el 8 de diciembre de 1984. Los resultados fueron los siguientes: DCG, 133 mil 577; y la UCN, 642 mil 306. La represión a trabajadores estatales y privados que mantenían huelgas en demanda de mejores condiciones de vida, el despido de muchos de ellos y la proliferación de secuestros y asesinatos —denunciados por el papa Juan Pablo II— enmarcaron el triunfo de Vinicio Cerezo como presidente de Guatemala.

Con la mayor parte del territorio guatemalteco militarizado, el arrasamiento de aldeas, miles de pobladores desplazados de sus lugares de origen, Guatemala accedió a un régimen civil el 14 de enero de 1986. En el ambiente político los guatemaltecos se preguntaban si Vinicio Cerezo constituía la última oportunidad para un

cambio pacífico en el país. Los resultados de la votación no fueron una sorpresa. Los pronósticos señalaban que la DCG era la organización que ganaría las elecciones. Puede considerarse como un factor importante el carácter masivo de la votación en favor de Cerezo. Pero esta situación no confería al nuevo gobernante un poder más fuerte. Con su voto los guatemaltecos rechazaron la presencia de los militares en el poder y se expresaron en contra de los sectores de derecha y ultraderecha.

Para el movimiento popular guatemalteco se abrió la perspectiva de ampliar su participación legal. De tener presencia en espacios políticos que se irían abriendo. Asimismo, sin desconocer lo que se ubica en Guatemala como terrorismo de Estado y el hecho de que las elecciones no se efectuaron en un país donde pueda afirmarse que hubiera una amplia democracia representativa, sí puede señalarse que el desarrollo y culminación del proceso electoral situó perspectivas que pueden catalogarse de positivas para la acción sindical y popular.

Las elecciones de 1990

El proceso electoral guatemalteco se encuentra en marcha. En noviembre de 1990 se efectuarán los comicios para elegir presidente y vicepresidente de Guatemala, así como diputados. En caso de que los candidatos presidenciales no obtengan mayoría absoluta, se efectuará una segunda vuelta en diciembre. Tomarán posesión en enero de 1991.

Los rumores de un golpe de Estado continúan dando la vuelta a toda la República, pero existen pocas posibilidades de que éste se desarrolle. Entre los factores que lo pueden impedir se encuentra la actual división en el ejército guatemalteco. No puede decirse que sea homogénea la institución armada de Guatemala. Asimismo,

la cúpula militar en el poder se inclina por desarrollar el proyecto electoral que se inició en 1984. De igual manera, puede destacarse que las puertas de la embajada estadounidense en Guatemala permanecen cerradas para los proyectos golpistas. En este sentido influye la actual situación internacional —donde destaca el proceso de distensión y las elecciones en Nicaragua—, así como el rechazo de la población guatemalteca a los sectores —civiles y militares— que se ubican en la ultraderecha.²

Algunos coroneles y generales sin mando de tropa, pero con pretensiones de ser candidatos, se mueven en el tinglado político del país. Consideran tener apoyo político —en realidad, de organización muy pequeñas o sin registro, como el Partido Feminista— y, obviamente, señalan que están en condiciones de aportar medios económicos para sacar adelante sus proyectos.³

Los esfuerzos que han desarrollado algunos expresidentes, como los generales Carlos Arana Osorio y Romeo Lucas García, para lograr un solo candidato militar, han fracasado. Más de 10 reuniones concluyeron en tertulias sin importancia. A ellas llegan civiles como Francisco Reyes Ixcamey, del Frente Democrático Popular (FDP) y Luis Felipe Monroy, del Movimiento de Unificación Nacional (MUN). Son políticos a los que se les olvida la importancia de un programa o proyecto y prefieren a un caudillo castrense.

La reunión de militares más destacada fue la que se efectuó en el departamento oriental de Chiquimula. Fue un cónclave que integró a militares como el general Abundio Maldonado, quien fue alcalde de la capital. Los guatemaltecos aún recuerdan los graves problemas que ocasionó al apoyar a los empresarios del transporte y mantener una posición en contra del movimiento popular que se oponía en 1978 al aumento de tarifas en los autobuses urbanos.

El general Ángel Anibal Guevara fue el ministro de la Defensa durante el régimen militar del general Lucas García. Fue la etapa en la que se iniciaron los genocidios en las aldeas y en que la represión prácticamente anuló al movimiento sindical y popular. Guevara fue el candidato presidencial en 1982. Sin embargo, sus propios compañeros de armas hicieron rodar sus pretensiones cuando dieron un golpe de Estado. Hoy vuelve a la carga este militar que se encuentra totalmente aislado de las necesidades del pueblo guatemalteco.

Uno de los militares con más preparación y experiencia en lucha de contraguerrilla es el general Benedito Lucas García. Fue jefe del Estado Mayor durante la gestión presidencial de su hermano, el general Lucas García. Hoy, este militar graduado en lucha de contrainsurgencia en Francia, busca un partido que lo apoye. Sus gestiones han sido infructuosas como lo son las del general Héctor Mario López, también jefe del Estado Mayor durante el gobierno militar del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Trató de lograr el apoyo del ultraderechista partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

Otros generales consideran que su presencia en el ministerio de la Defensa u otra área militar es suficiente para optar a la candidatura presidencial. Ignoran el rechazo del pueblo guatemalteco a las gestiones de los militares en el gobierno. Entre ellos se encuentran los generales Fausto David Rubio Coronado, funcionario de los gobiernos del general Arana Osorio y Kjell Laugerud; y Otto Spiegler Noriega, ministro de la Defensa de Lucas García. Todos ellos consideran que su pasado militar en determinado cargo gubernamental es suficiente argumento político para ser candidatos presidenciales. En igual circunstancia se encuentra el coronel Francisco Gordillo. Su organización, el Movimiento Emergente de Concordia (MEC), fue el partido que me-

nos votos obtuvo en las pasadas elecciones. Gordillo encabezó en 1982 —junto con los generales Ríos Montt y Maldonado Shaad— el golpe de Estado que derrocó al general Lucas García. Los sectores democráticos han criticado duramente la gestión de Gordillo como jefe de la base militar de Quezaltenango.

Finalmente, debe señalarse al general Efraín Ríos Montt apoyado por un grupo de partidos que se denomina Alianza 90. Se integra con la Agrupación Nacionalista Guatemalteca (ANGUAT), sin registro; el Frente Unido Nacionalista (FUN); el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente Democrático Popular (FDP), sin registro. Ríos Montt, que dirigió el golpe de Estado de 1982, es un militar fanatizado evangelista, que pertenece a la secta *Verbo*. Gobernó Guatemala de 1982 a 1983. En ese lapso se incrementó la represión contra el movimiento sindical y popular. Enfrentó a la Iglesia católica contra la evangelista y es el creador de los





Tribunales de Fuero especial (de carácter fascista), que fusilaron —sin ninguna posibilidad de defensa— a 15 guatemaltecos y un hondureño, haciéndoles una parodia de juicio. Constitucionalmente Ríos Montt no puede ser candidato. La Corte de Constitucionalidad ya emitió un dictamen al respecto. Sectores de derecha, y otros que se vinculan con sectas evangelistas, lo presentan como el militar que por su mano dura (esto significa represión) puede gobernar a Guatemala e imponer la paz. Sin respetar las normas constitucionales —las cuales estipulan que ningún jefe de gobierno puede optar nuevamente a cargos públicos—, sus simpatizantes han acuñado la frase "si el pueblo lo pide, quién se lo impide".

¿Cómo puede pretender gobernar nuevamente el país un general que inicia su candidatura vulnerando la Constitución de la República? Un militar acusado de agredir los derechos humanos. Un hombre que no tuvo ningún respeto a las creencias religiosas de los guatemaltecos cuando aseguraba por la televisión que Dios lo había llevado al poder en 1982.

Los militares guatemaltecos ya no pueden imponer sus criterios por medio de la fuerza. Su presencia en el gobierno durante varias décadas es sinónimo de represión.

No hay ninguna probabilidad —hasta el momento— de que sectores democráticos y revolucionarios que se encuentran en la clandestinidad o en el exilio puedan participar en las elecciones. Esto se debe a que no existen condiciones mínimas de seguridad y al incremento de la represión. Por otro lado, realmente el gobierno no tiene ningún ánimo de establecer negociaciones con el movimiento revolucionario.

Entre los partidos políticos con mayores opciones para ganar las elecciones y los problemas que confrontan se pueden señalar los siguientes:

El actual partido gobernante —la DCG—, que se ha convertido en una organización desgastada que no

pudo impulsar su propio plan de gobierno. A esta situación se une el obvio descontento de la población por la profundización de la crisis económica. Especial referencia debe hacerse al incremento de la represión y violación de los derechos humanos en Guatemala. Incluso, el gobierno de Estados Unidos denunció este aspecto e indicó que los responsables deben ser enjuiciados.

Dentro de la DCG existe el Movimiento por la Renovación Ideológica que ha sido impulsado por dirigentes como Danilo Barilla —asesinado hace un año— y René de León Schlotter, fundador del partido y dirigente de la Democracia Cristiana Internacional. Esta situación originó un movimiento que rompió con la unidad de la DCG.

El movimiento interno de la DCG señala que es necesario acabar con la corrupción de funcionarios dentro del partido y en el gobierno. Se refieren a las acusaciones que en este sentido se han dirigido contra el hermano del presidente Cerezo y, para citar brevemente, a la denuncia pública que recientemente hizo la Agencia Interamericana para el Desarrollo (AID), en el sentido de que varios millones de dólares destinados a resolver problemas de salud de la niñez guatemalteca, no aparecen. Por otro lado, acusan a los dirigentes demócratacristianos de haber anulado la democracia interna, aspecto que implica haber impuesto como candidato —indican el fraude que se cometió— a Alfonso Cabrera, secretario general de la DCG. Esta situación se une a la ausencia de alternabilidad en el partido y a los problemas que representa no tener una línea definida de gobierno, lo cual señala la dependencia de Vinicio Cerezo respecto del ejército.

Al candidato presidencial de la DCG, Alfonso Cabrera, se le asocia —al igual que a su hermano— con el narcotráfico. Éste, para negarlo, ha desarrollado una

amplia campaña que lo ha llevado a la sede de la embajada estadounidense en Guatemala. Su candidatura ha sido impugnada por miles de militantes, quienes lo acusan de haber cometido fraude para ganar las elecciones de su partido. Era el candidato de Vinicio Cerezo. La DCG mantiene una amplia estructura organizativa en el interior del país. Éste será uno de sus recursos más importantes en el proceso electoral.

La UCN mantiene una estructura unitaria que lo sigue impulsando como la segunda fuerza política del país. Por el liderazgo personal que impone Carpio Nicolle, la Unión ha tenido problemas como renunciadas de dirigentes, entre ellos Ramiro de León Carpio. También se ha criticado a Carpio que no desarrolle los principios democráticos dentro del partido. La UCN es miembro de la Internacional Liberal.

Aunque la UCN se ubica como un partido "de centro", sus principales dirigentes se encuentran vinculados con una nueva derecha —tipo neoliberal—. Es posible que sean la opción política frente a la DCG. La derrota electoral del FSLN en Nicaragua puede favorecer el desarrollo de esa derecha que se encuentra en la UCN. Por otro lado, este partido trata de canalizar los errores de los demócratacristianos y propone la anulación de algunos ministerios —Cultura, Deportes, Asuntos Específicos y Desarrollo— por considerar que únicamente sirven para promoción política. Advierten que la DCG no ha sabido cumplir con su compromiso de crear verdaderamente un Estado de Derecho y destacan los aspectos negativos de la represión. En los círculos de la política guatemalteca se considera que el desgaste de la DCG, aunado a los graves problemas económicos que afronta el país, la visible corrupción y los actos de represión contra el movimiento sindical y popular, son factores que pueden influir para que la UCN gane las elecciones.

El Partido Socialista Democrático (PSD) participó por primera vez en las elecciones en 1984. Es miembro de la Internacional Socialista. Su secretario general, Mario Solórzano Martínez, realizó estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. El PSD tiene un programa político coherente y problemas internos —especialmente los que se refieren a la inconveniencia que vieron algunos de sus miembros en que Solórzano Martínez fuera nuevamente el candidato presidencial— se han solventado con el apoyo que están dispuestos a darle a René de León Schlotter. Esta situación permitirá que obtengan un mayor número de votos, especialmente de los demócratacristianos inconformes con su organización.

La atención política guatemalteca se trasladó a la alcaldía de la capital. Álvaro Arzú —el alcalde electo— renunció para fortalecer su candidatura presidencial. Su organización es el Partido de Avanzada Nacional (PAN), que ha empezado a cobrar una mayor presencia organizativa en el interior del país, pero no puede afirmarse que tenga la popularidad suficiente. La inicial militancia política de Arzú fue en el MLN. Su propósito es buscar la unidad de los sectores de la derecha guatemalteca. Asimismo, plantea un amplio nivel de acercamiento con el general Ríos Montt. En la actualidad, aunque Arzú se plantea como exponente de una nueva derecha, será muy difícil que logre rebasar los logros —muy pocos— que alcanzó siendo alcalde.

Las sorpresas han empezado a producirse. La más notoria fue la renuncia de Fernando Andrade Díaz-Durán a su candidatura presidencial. Fue el canciller del gobierno militar de Mejía Víctores. Su apoyo al grupo de Contadora fue el principal factor en su favor, aspecto que le reconociera el gobierno del presidente mexicano Miguel de la Madrid cuando lo condecoró con el Águila Azteca.

Díaz-Durán estaba apoyado por tres organizaciones: el Partido Nacional Renovador (PNR) y el Partido Democrático de Cooperación Nacional (PDCN). Realmente, dos organizaciones con poca presencia popular. Asimismo, por el Partido Revolucionario (PR), que tiene bases fuertes en el interior del país, pero se encuentra agobiado por las divisiones políticas. Con tres organizaciones que buscarán alianzas o se inclinarán por un candidato militar. Ésta es la situación que presenta el Partido Nacionalista Guatemalteco (PNG). Su principal dirigente, Mario Castejón, apoyó públicamente a la "contra" nicaragüense. No tiene ninguna fuerza real y busca un candidato militar.

El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) es la organización que integra a los sectores más atrasados de la derecha guatemalteca. Tradicionalmente ha apoyado a los militares, ya sea para optar a candidaturas presidenciales o cuando éstos han dado golpes de Estado. Públicamente han aceptado su participación en la creación de escuadrones de la muerte. En las etapas que han gobernado al país —muchas de ellas por fraudes electorales— se ha recrudecido la represión.

Su candidato es Manuel Ayau, exrector de la Universidad privada católica "Rafael Landívar". Es muy difícil que logre unificar a la derecha y ultraderecha guatemaltecas. Y de lograrlo, son bastante remotas las posibilidades de que logren ganar las elecciones. En 1985 fueron los grandes derrotados. A partir de esa fecha, no pudieron superar la división de la derecha en el país. En este sentido influye el caudillismo de su dirigente más destacado, Mario Sandoval Alarcón. Están dispuestos a apoyar un golpe de Estado y mantienen estrecha relación con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de El Salvador.

Finalmente, debe mencionarse la candidatura del ingeniero Jorge Serrano Elías, estrechamente relaciona-



do con los grupos evangélicos de Guatemala. Fue presidente del Consejo de Estado durante el gobierno del general Ríos Montt. Su organización se denomina Movimiento de Acción Solidaria (MAS). Considera que debe pugnarse por un "capitalismo humanista". Serrano Elías representa a los partidos políticos en la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR). Tiene poca fuerza política. Sin embargo, es posible que adquiera otra dimensión si llegara a fructificar el diálogo que se desarrollará en Oslo entre la CNR y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El panorama político guatemalteco prácticamente se encuentra definido. Será muy difícil encontrar sorpresas en las candidaturas presidenciales. Posiblemente éstas se desarrollen en las alianzas que se logren concretar.

El proceso electoral se desarrolla en un momento en que se ha intensificado la acción represiva contra el movimiento sindical y popular. En el campo, grupos de

hombres armados ametrallan a campesinos indefensos. Esta situación despierta dudas sobre la realización de elecciones libres, ya que las que ha habido han estado llenas de imposiciones y golpes de Estado. Sin embargo, es una vía de actividad legal para desarrollar la lucha política. Es un espacio político que no debe cerrarse. Por el contrario, debe analizarse con seriedad, porque amplios sectores de la población guatemalteca se encuentran inmersos en ese proceso.

Diálogo que abre esperanzas de paz

En Guatemala existe un conflicto armado interno. Así lo consigna la resolución que adoptó la ONU en 1983. El periodo violento en ese país centroamericano —que se inició en 1960— ha tenido una duración de casi 30 años. Aproximadamente 100 mil muertos y 38 mil de-

tenidos-desaparecidos es el saldo dramático de una guerra que afecta a toda la población.

Es necesario señalar que, según los compromisos que contiene el *Acuerdo para lograr la paz firme y duradera en Centroamérica* (Esquipulas I y II) se empezó a desarrollar —a partir de 1988— el diálogo nacional en Guatemala, convocado por la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR). Las actividades continúan efectuándose con participación de diversas organizaciones sindicales y populares. Es una pequeña esperanza que se abre para que se entable un diálogo sobre los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta el país. En este diálogo no participan algunas fuerzas que se han autoexcluido, como el ejército nacional, la poderosa Cámara de Agricultores, Comerciantes, Industriales y Financieros (CACIF), y sectores de ultraderecha. Asimismo, no se permitió la presencia de la URNG.

En octubre de 1987 se reunieron en Madrid, España, las delegaciones del gobierno guatemalteco y de la URNG. En esa ocasión la URNG propuso un cese al fuego y la continuidad del proceso de diálogo que se había iniciado. Esta situación prácticamente quedó estancada ante la total negativa de sectores civiles y militares, calificados de ultraderechistas, a continuar las negociaciones que podrían poner fin al conflicto armado en Guatemala. Incluso, algunos grupos trataron de justificar intentos posteriores de golpe de Estado entre ellos los que se identifican como "oficiales de la montaña", quienes acusan además de "traidores" al gobierno y a los militares que están de acuerdo en dialogar.

En mayo de 1988, la URNG se reunió en San José, Costa Rica, con la CNR. Los breves acuerdos que habían logrado, sin embargo, no pudieron concretarse. El gobierno de Guatemala insistió en que la URNG se acogiera a la amnistía —un aspecto casi nulo por la falta de

seguridad, las presiones de los grupos ultraderechistas, la ola represiva en toda la República.

La reunión de Oslo

La ciudad de Oslo, Noruega, fue escenario de la reunión que sostuvieron el pasado 30 de marzo la delegación de la CNR, integrada por Jorge Serrano Elías, Eduardo Villatoro y Mario Permuth (con el respaldo del gobierno guatemalteco), y la URNG, cuya delegación se formó con Luis Becker Guzmán, Jorge Rosal y Francisco Villagrán (con el pleno apoyo de la Comandancia General de esa organización). Las dos delegaciones señalaron en un comunicado oficial su voluntad.

...para encontrar caminos de solución pacífica a la problemática nacional por medios políticos, y reconociendo ambas partes que este objetivo es básico para lograr la reconciliación entre los guatemaltecos.

Es importante destacar el acuerdo de ambas delegaciones para que Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, en su calidad de presidente de la CNR, realice funciones de Conciliador. Él tendrá a su cargo

proponer iniciativas a todas las partes, gestionar y mantener acciones de diálogo y negociación, dinamizando este proceso y resumiendo las posiciones convergentes y divergentes que entre las partes puedan darse, teniendo la facultad de proponer iniciativas y soluciones con el objeto de que puedan ser discutidas y acordadas.

Monseñor Quezada Toruño es una de las personas más apreciadas en Guatemala. Su recia personalidad y evidente humanismo serán importantes en la continuación de este diálogo. Pero, en lo fundamental, por sus

reconocidos esfuerzos por lograr la paz en Guatemala. Éste es un factor en el cual coinciden la gran mayoría de las organizaciones que integran el movimiento sindical y popular.

La CNR y URNG también acordaron realizar en la segunda semana de mayo de 1990 una reunión entre representantes de los partidos políticos de Guatemala y delegados de la URNG. Hasta el momento, la gran mayoría de partidos políticos legales en el país han expresado su decisión positiva de participar en el encuentro. De este aspecto se autoexcluyeron organizaciones ultraderechistas, principalmente el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), cuyos voceros han dado a conocer su negativa de estar presentes en la reunión.

La Comisión Nacional de Reconciliación, de común acuerdo con la URNG, creará los mecanismos que permitan celebrar, de preferencia en el mes de junio de 1990, las reuniones necesarias entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y representantes de los sectores populares, religiosos y empresariales del país, así como otras entidades políticamente representativas, a efecto de encontrar los caminos de solución a los problemas nacionales.

Por otro lado, según el texto que firmaron las delegaciones de la CNR y la URNG,

...en la fecha que será fijada de común acuerdo por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, serán celebradas conversaciones encaminadas a lograr la solución política del enfrentamiento armado interno

entre representantes —con capacidad de decisión— del gobierno de la República de Guatemala y el Ejército, así como la Comandancia General de la URNG. La Comisión Nacional de Reconciliación participará en estas reuniones para los efectos de constatación y verificación, en conformidad con las funciones que le asigna el Acuerdo Esquipulas II.

Se ha abierto, pues, la posibilidad de encontrar una solución negociada al conflicto guatemalteco. Las organizaciones sindicales y populares, así como el pueblo en general, desean que esta situación concluya positivamente. Son muchos años de guerra. De familias enlutadas. De freno al desarrollo económico y social del país. Esta voluntad que hoy expresan para el diálogo la URNG y la CNR, no debe quedar en el vacío. Es necesario que el gobierno guatemalteco no encuentre subterfugios para abandonar la mesa de negociaciones. Es un requerimiento nacional que lo permiten las actuales condiciones del país y la coyuntura internacional. Ningún argumento puede plantearse para romper una paz que todos desean.

Notas

- 1 "Guatemala, elecciones de 1985", en *Inforpress Centroamericana*, Guatemala, octubre, 1985.
- 2 *Proceso electoral en Guatemala 1990*, s/a, mimeografiado, Guatemala, diciembre, 1989.
- 3 "Y volver, volver...", en *Crónica*, No. 113, del 16 al 22 de febrero, Guatemala, 1990.